SEXTA SECCIÓN
EXPERIENCIAS EN AMÉRICA LATINA

REFLEXIONES SOBRE LAS TENSIONES ECONÓMICO-SOCIALES EN LA ARGENTINA ACTUAL

POST SCRIPTUM*

ALEJANDRO ROFMAN**
CARLOS FIDEL***

Consideraciones preliminares

En el trabajo al que se refiere este post scriptum delimitamos dos modelos que a lo largo de la historia de la República Argentina estuvieron en pugna para hegemonizar el dominio político aunado al diseño de la dimensión económico-social, incidiendo en la configuración y la distribución de la riqueza material.

Uno de los esquemas conceptuales y prácticos lo denominamos como el "Modelo Económico Conservador o de Sociedad de Mercado". El mismo se basa en una estrategia neoliberal de acumulación centrada en los intercambios de la oferta y la demanda que se realizan en el marco del mercado, articulado a una plena apertura a los flujos de las importaciones y exportaciones con el resto del mundo relacionados con la esfera financiera. Su esquema está sostenido en las ventajas estáticas del sector primario que comprende la alta fertilidad diferencial de vastas áreas rurales, sumado a la extracción de las reservas de minerales y bienes, energías renovables y no renovables localizados en ciertas áreas del país. En general este modelo estuvo impulsado por los segmentos políticos más "conservadores" que atraviesan a casi todas las fuerzas políticas y, en muchas ocasiones, dotaron de propuestas programáticas a los diversos golpes cívicos-militares que en distintos momentos interrumpieron la vida democrática nacional.

* Post scriptum al capítulo "Dos modelos ecónomico-sociales en Argentina: principales estrategias y contradicciones" (Rofman y Fidel, 2018).

** ** Universidad Nacional de San Martín, Argentina. Asesor de la Comisión Nacional de Microcrédito. Investigador principal del CONICET en CEUR/CONICET.

*** Docente investigador Consulto Universidad Nacional de Quilmes, Argentina.

Al anterior paradigma se le contrapuso el denominado "Modelo Económico Progresista o de Sociedad de Trabajo". El mismo propone sumar a las fuentes de la riqueza de origen primario diferentes modalidades de desarrollo de un proceso industrializador de la economía, a la par que busca la incorporación de las nuevas tecnologías aplicadas en los circuitos de la producción y la distribución de los bienes y servicios. Para tales metas propone la intervención del Estado de modo directo y/o aplicando políticas económicas con el propósito de desplegar las fuerzas productivas, la ampliación del mercado interno y la búsqueda del pleno empleo de los factores del trabajo y del capital. En específico, las fuerzas políticas comprendidas en este espacio de pensamiento tienden a ser democráticas y se proponer ampliar el consumo global mediante una distribución más justa de la riqueza.

Periodo 2015-2019

En noviembre de 2015 se llevaron a cabo las elecciones. Por una diferencia de 2% en la segunda vuelta, ganó la Alianza electoral denominada "Cambiemos", conformado con la hegemonía del relativamente flamante partido PRO, el que expresa la unión con otras fuerzas políticas, en especial una parte mayoritaria del tradicional partido Unión Cívica Radical (UCR), el que le aportó estructura partidario nivel nacional.

De este modo, de nuevo se da inicio a un modelo político y económico neoconservador, instrumentando un régimen neoliberal sustentado en una estrategia extractivista. Basaba en la supremacía de la economia de mercado con el principal objetivo, a partir de dicho modelo de acumulación, en la generación de una robusta tasa de ganancia concentrada en la valorización financiera como principal dinámica de tal proceso, centrada en la especulación en el plano monetario desplazando a la economia real a un segundo plano.

La vigencia del modelo de especulación financiera generó un cuadro económico-social crecientemente complicado, con riesgos de enfrentar una significativa crisis sistémica. Así, el cierre del 2017 mostraba la vigencia de un año de expansión económica apoyado en la entrada de capitales financieros especulativos que aportaron a una creciente y transitoria liquidez, mejoras en el nivel del consumo y expansión del crédito bancario.

Esos capitales –aportados preferentemente por Fondos de Inversión– recogían suculentas ganancias en pesos debido a colocaciones realizadas a elevadas tasas de interés. Cuando a principios del año 2018 los inversores especulativos percibieron que la solvencia del sistema financiero argentino

estaba debilitándose a pasos agigantados por la incapacidad estructural de que estuvieran disponibles tales capitales si deseaban ser repatriados, se generó una corrida financiera que amenazaba la solvencia del sistema financiero local para afrontar tal salida de capitales financieros. El gobierno nacional en el primer semestre del año 2018, acudió al Fondo Monetario Internacional (FMI) para que le prestase los fondos necesarios para viabilizar el retorno a sus orígenes de los capitales especulativos, lo que desató una aguda crisis económica.

El acuerdo con el FMI fue en torno a los 54,000 millones de dólares, autorizado en forma ilícita por su directorio dado que excedía el nivel prestable a Argentina según su Carta Orgánica. El objetivo del FMI, otorgando ese crédito excesivo, no solamente era garantizarles a los capitales especulativos externos la solvencia necesaria al BCRA para recuperar las inversiones de corto plazo, sino también era una "ayuda" política que el gobierno de Estados Unidos, vía el presidente Trump, le otorgó al presidente Macri a fin de respaldarlo para su eventual reelección a fines del año 2019.

La recesión fue intensa en el año y medio transcurrido desde el otorgamiento del ilícito crédito del FMI hasta el fin del mandato presidencial de Macri: dos años de retroceso económico, caída significativa del salario real de 20%, y aumento del desempleo, de la pobreza y de la indigencia.

Un eje temático que expresa los resultados de los dos modelos socio-económicos en cuestión es su expresión en la deuda externa y el nivel de reservas en otras divisas que tenía el gobierno nacional. Enfocando los resultados del comercio exterior de este siglo se observa que en el periodo comprendido entre el año 2000 hasta diciembre 2023, se obtuvo un superávit comercial de 267,192 millones de dólares.

Hay que consideran que entre los años 2005 y 2010, encuadrado en una negociación regional donde participaron varios países, se realizó una conversión de títulos de la deuda externa que redujo notablemente su monto y se restructuró el pago de la misma. En esos años hay que señalar que el 3 de enero de 2006, en ese momento con la presidencia del gobierno de Néstor Kirchner, se canceló la deuda con el FMI mediante un solo pago de 9,810 millones de dólares.

En diciembre de 2015, cuando asume el nuevo gobierno la deuda externa era equivalente a 222,703 millones de dólares. Es importante observar que el 60% del total se explicaba por los compromisos con distintos organismos del propio sector público; una parte importante era una deuda con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), a lo que se le agregaba otras deudas con

bancos públicos y otros fondos fiduciarios argentinos. El resto de la deuda se distribuía un 9% con organismos multilaterales de crédito (alrededor de 20,043 millones de dólares), y el 31% con el sector privado (unos 69,038 millones de dólares).

Por lo anterior el total de la deuda externa argentina en poder de organismos internacionales y bonistas privados era de 89,081 millones de dólares.

El gobierno del presidente Macri duró hasta el año 2019. En ese lapso la deuda externa se incrementó. Los requerimientos financieros del Tesoro Nacional dejaron de manejarse con préstamos internos y empezaron a realizarse con fuentes externas. Además, según estudios del BCRA en ese tiempo de fugaron 86,200 millones de dólares. En diciembre de 2019 la deuda pasó a ser de 320,630 millones de dólares, o sea que aumento en 97,927 millones de dólares durante la gestión de Cambiemos. El 40% se comprende por la ampliación de la deuda al interior del sector público, 22.7% con organismos internacionales, especialmente con el FMI por 44,599 millones de dólares y 37.3% restante con el sector privado. Sintetizando, en ese periodo se aumentó la deuda externa, orientándose más el peso relativo de la deuda con los organismos multilaterales de crédito y acreedores privados.

Hay que señalar que el préstamo que le otorgo el FMI fue el mayor de la historia de dicho organismo y no respetó los estatutos del mismo. Los préstamos del FMI tienen la particularidad de "condicionar" la política económica-social local con el objeto de garantizar el pago de los intereses de los préstamos para justificar su propia existencia, con ese objeto impone la aplicación de la misma "receta" de medidas neoliberales en todos los países del mundo donde actúa (Rovelli, 2024).

La elección del nuevo presidente fue a fines del 2019. La población argentina optó por un nuevo gobierno encabezado por Alberto Fernández, que se comprometió retornar a la vigencia del modelo de acumulación progresista, cimentado en el fortalecimiento de la economía real y el mercado interno, y en la distribución crecientemente equitativa del ingreso nacional.

Periodo 2019-2023

A fines del 2019 en la convocatoria a las elecciones gana una nueva alianza denominada "frente de todos" (FT) que propone de candidato a presidente a Alberto Fernández y a vice presidenta a Cristina Fernández, esta última es la que aportó mayor cantidad de votos. La nueva coalición ganó, generando una gran expectativa en los votantes de volver al cauce de una

estrategia de producción y distribución que mejorara las condiciones de vida e ingreso de la población.

Inicialmente el nuevo gobierno no tuvo grandes iniciativas en ninguno de las dimensiones de la economía, la esfera social-política. Esta situación podía responder a las tensiones que surgían en el interior de los equipos de gobierno, tal vez combinadas con la falta de decisión de impulsar un proyecto de recuperar y avanzar en conformar un "Estado social" articulado a una ampliación de la distribución del ingreso.

A los pocos meses de asumir el nuevo gobierno, se desata una pandemia a nivel mundial. Sus efectos aparecen en el país vía las personas que venían de los países limítrofes, sumados a las personas que llegaban, especialmente en avión, de diversos lugares del mundo. Es de señalar que el Covid-19 tiene un origen incierto con la característica de tener una alta capacidad de contagió.

A principios de 2020 cuando se desata la epidemia global no se disponía de vacunas para atenuar o detener sus efectos. La respuesta de los diferentes países fue adoptar las antiguas medidas sanitarias: aislar a la población para evitar los contactos directos y promover que no salgan de sus viviendas.

La repuesta gubernamental fue rápida, expresando de manera acoplada la capacidad instalada del sistema sanitario y de las cualidades de sus operarios en los distintos niveles de atención. En el año 2020, el cierre de gran parte de las actividades productivas generó un severo descenso del PIB y del conjunto de los indicadores sociales. La importante mejoría del 2021 compensó las pérdidas del año inicial, pero no pudo satisfacer las metas que se propuso originalmente, con el consiguiente malestar de gran parte de la sociedad. En los años 2022 y 2023 por varias razones no se pudieron consolidar el crecimiento económico ni mejorar el perfil distributivo del ingreso.

El año 2022 se registró aumento un 5% del PIB, pero luego fue declinante, con dificultades serias para una mejora social significativa, generadas en factores internos y externos relevantes pero el principal fue que no se elevó el ingreso real. En 2023 se volvió al retroceso económico básicamente porque se perdió el 50% de las cosechas, base del comercio exportador; causada por las desfavorables condiciones climáticas, con el consiguiente retroceso en las exportaciones de cereales y oleaginosos que son rubros claves en las ventas al exterior.

Esta situación impulsó el encarecimiento de los precios en el mercado interno. En ese contexto se perdieron en el año 2023 alrededor de 20,000 millones de dólares en exportaciones, lo que representó el 25% del total del año anterior. Implicando una caída de ingresos fiscales estimados en

6,000 millones de dólares, valor atribuible a la tributación tanto directa como indirecta del desempeño del comercio exportador.

Aunque en términos de producción de bienes y servicios el ciclo 2019-2023 se cierra con un saldo positivo de 4 puntos porcentuales, simultáneamente el aumento del ingreso per cápita fue levemente negativo.

La administración gubernamental tuvo dificultades para controlar el desborde inflacionario, que retomó una senda ascendente que comprometió el retorno a niveles de ingresos reales positivos en magnitud tal que superasen los índices del 2019.

El repunte productivo tuvo componentes macroeconómicos aceptablemente buenos, pero no funcionó el intento oficial de redistribuir el pastel del crecimiento económico de modo favorable a los sectores de más bajos ingresos del trabajo asalariado o los que se encontraban en el mercado de trabajo informal que conformaban un 40% del total de la fuerza de trabajo.

Conviene enfocar que el área económica, desde que asumió, se concentró en priorizar la negociación de la deuda externa, misma que recibió de la gestión anterior. El nuevo gobierno no investigó la legalidad y acuerdos de la deuda externa arrastrada de la previa administración, hizo todo lo contrario: la acepto en su conjunto.

Desde nuestra perspectiva el impacto del proceso de renegociación del crédito tomado por el gobierno anterior fue nocivo para la evolución del país. Lo que hizo fue primero renegociar con los tenedores privados por alrededor de 105,000 millones de dólares, tanto con los que estaban acordado en jurisdicción extranjera como los de jurisdicción local. Realizó un amplio canje por títulos que van a devengar interés y se comenzara pagar el capital en el segundo semestre de 2024, con posteriores vencimientos parciales hasta el año 2041.

La política económica desplegada en el transcurso de la renegociación estuvo fuertemente condicionada por la necesidad de transformar el préstamo con el FMI en otros términos, dado que resultaba impagable el monto y las fechas del compromiso financiero del sector público en la forma que estaban adjudicados al gobierno anterior.

Con el FMI se cambió un crédito Stand By a tres años por un "Plan de Facilidades Extendidas", acordando que cada vencimiento de capital se refinancia a 10 años. Por ello si el gobierno argentino cumpliera puntualmente con los pagos, los compromisos con el FMI se cancelarían en septiembre de 2034.

El llamado "Plan de Facilidades Extendidas" contenía metas trimestrales y de esa manera debía ser revisado periódicamente por los técnicos del FMI: Dichos técnicos tienen la función de evaluar el cumplimiento

de las metas acordadas. El núcleo acordado con el FMI en el denominado Memorándum de Entendimiento fue: en 2022 un déficit fiscal sobre el PIB de 2.5%; en 2023 un déficit fiscal de 1.9% del PIB; en 2024 un déficit fiscal de 0.5% del PIB; y en 2025 un déficit fiscal de 0% del PIB.

Esto implicó un fuerte condicionamiento de la política económica, e incidió directamente en la política social. Estos acuerdos no se pudieron cumplir y se fue renegociando la deuda con el FMI. En parte porque la cosecha de 2023 fracasó y no hubo excedentes financieros provenientes de esa fuente.

Las exigencias condicionantes impuestas por el FMI tales como elevar la tasa de interés fijada por el Banco Central para el mercado interno en varios puntos más que la tasa de inflación, reducir drásticamente el gasto público y disminuir el financiamiento estatal vía el Banco Central, coartaron seriamente la autonomía de gestión del gobierno. Así, impulsaron la tasa de crecimiento de los precios relativos, acentuaron el costo del financiamiento bancario para la marcha de las empresas y limitaron el rol regulador del Estado.

No osbtante, el empleo creció en todo el periodo, más allá del débil impulso de la actividad económica y de los efectos negativos del acuerdo con el FMI. La tasa de desempleo al cierre del periodo se redujo a la mitad del nivel inicial original. Tal vez esa fue la dimensión social más significativa del periodo; sin embargo, quedó opacada por el aumento de la pobreza y la indigencia, fruto de la reducción del salario real mucho más alto en los sectores laborales informales que en el trabajo formal.

Periodo 2023-actualidad

A fines del año pasado, empezó una nueva gestión gubernamental de los autodenominados “libertarios”. La misma llegó para implantar una vasta y arrogante refundación del entramado socioeconómico. La iniciativa estuvo configurada con una matriz ideológica marcada por un confuso pragmatismo neoliberal extremo. Tiene el propósito manifiesto de cambiar el entramado de la reproducción de las relaciones sociales, económicas, culturales y gubernamentales del país.

En el último golpe cívico-militar se intentó realizar una refundación estructural de corte neoliberal de la economía. Sustentado en la criminal represión estatal se llevaron a cabo desregulaciones productivas, financieras, laborales y de apertura irrestricta a las importaciones.

Posteriormente, en los cuarenta años de democracia, la orientación estratégica neoliberal se volvió a intentar llevar a cabo con gobiernos de diversas tonalidades políticas. Todas las tentativas, a pesar de sus matices y distintas modalidades políticas terminaron aumentando la desindustrialización, el desempleo y la pobreza, en algunos casos con altos niveles de inflación, con recesión interna combinada con gran endeudamiento externo; en muchas ocasiones, con la presencia de tensas y/o desatadas expresiones de alta conflictividad social.

El actual gobierno tiene sus propias peculiaridades que es necesario señalar. Representa una endeble asociación política donde participan personajes de distintas trayectorias. Está liderada por un economista que se inició en la práctica política el 10 de diciembre de 2021, cuando asumió su mandato en la Cámara de Diputados de la Nación. Su nombre se hizo más conocido cuando comenzó a donar su dieta, mediante sorteos mensuales.

Realizó una campaña presidencial con un discurso contradictorio, ficticio y sintónico con la posverdad; teñido de inusitados y absurdos gestos, gritos, expresiones de enojo y con poca argumentación. Con un vasto y hábil uso de las redes sociales, sumado al apoyo indisimulado de los principales medios de comunicación corporativos. Prometió llevar a cabo acciones desregulatorias, terminar con la inflación y modificaciones regresivas en varias dimensiones de la vida social e individual.

En los aspectos económicos se centró en plantear que iba a aplicar un fuerte ajuste a los gastos de la "casta política" para equilibrar las cuentas fiscales. Cerrar el Banco Central y dolarizar la economía, con la finalidad de terminar con la inflación.

Como buen extremista liberal que se autoidentifica con un llamado enfoque "anarco liberal", sostiene que desmontando el Estado y abriendo la economía al mercado con otros países capitalistas, automáticamente se desatarán las fuerzas productivas que están contenidas por las distorsionantes intervenciones estatales.

Sus elementales planteos apologéticos y economicistas siempre se realizan basados en un esquema conceptual marcados por una irreal competencia perfecta entre agentes económicos, que se despliega en un hipotético "mercado" donde no se registran "imperfecciones" procedentes de conductas monopólicas ni concentraciones de la riqueza (Gambina, 2021). Son ideas que se referencian en la "Escuela Austriaca de Economía" que se creó en Viena a fines del siglo XIX. Provienen del pensamiento económico liberal, discrepando con el resto de las corrientes del pensamiento económico. Ponen acento en que la utilidad subjetiva de cada individuo es la que